

TEMAS ECONÓMICOS

Grave normalización del retroceso

Chile no ha logrado recuperar un rumbo de progreso. El largo estancamiento de nuestra economía es uno de los más claros signos. La tolerancia a las incivildades, su peor manifestación cultural.

Excluyendo 2021, año de recuperación luego de una profunda caída del producto por la pandemia, el país no ha experimentado un crecimiento anual superior al 4% desde 2012. En promedio, desde el 2014 al 2025, la expansión anual del PIB se situó en torno al 2%. Durante los últimos años, además, la inversión ha mostrado una dinámica preocupante y el mercado laboral, un deterioro evidente: la última vez que el nivel de desempleo agregado estuvo por debajo del 8%

fue en el trimestre móvil octubre-diciembre de 2022. En materia fiscal, mientras en 2016 el país era acreedor neto, hoy los pasivos (descontando los recursos de los fondos soberanos) superan el 26% del producto.

Todas estas cifras describen un retroceso que debería alertar transversalmente a nuestra clase política. Sin embargo, aún existe resistencia a aceptar lo evidente: Chile perdió su motor de progreso. Y quizás como manifestación de lo mismo, se observa una ten-

dencia a normalizar los signos del retroceso. La complacencia con que parte de la izquierda analiza los datos de empleo para evitar asumir responsabilidades—bajo los gobiernos de Michelle Bachelet y Gabriel Boric fueron múltiples las iniciativas que rigidizaron el mercado laboral—es una muestra. Del mismo modo, la búsqueda de explicaciones tácticas para justificar la evolución de las cuentas fiscales revela tolerancia frente a situaciones que en el pasado hubiesen sido inaceptables.

Buenismo financiero y riesgo moral

Pero esta normalización de lo que debiera ser preocupante se observa en muchos más ámbitos. Desde la evasión en el transporte público hasta las licencias médicas fraudulentas, parte de la población parece haber olvidado las obligaciones que enfrenta todo miembro de una sociedad.

La tolerancia al no pago de deudas es un buen ejemplo del avance de las incivildades. Y no se trata de un fenómeno inocuo: altera profundamente los incentivos que sostienen cualquier sistema de financiamiento.

En el caso de los estudiantes universitarios que recibieron créditos del Estado, el incumplimiento ha dejado de percibirse como una excepción, insta-

lándose incluso como una opción válida, incentivada por la política (es necesario recordar la posición de los dirigentes del Frente Amplio al respecto). Y es que, si existe la expectativa de futuras condonaciones, el costo de no pagar cae drásticamente desde la perspectiva individual. El resultado es un problema clásico de riesgo moral: incluso quienes tienen capacidad de pago pueden optar por no cumplir, anticipando beneficios futuros o baja probabilidad de sanción. En el corto plazo, esto tensiona la sostenibilidad financiera del sistema; en el largo, compromete su legitimidad. Ambas situaciones han llevado a una situación crítica al Crédito con Aval del Estado.

Pero el impacto va más allá de lo financiero: cuando el mensaje es que las obligaciones pueden eludirse sin consecuencias relevantes, se debilitan normas básicas de cumplimiento que luego se trasladan a otros ámbitos de la vida. Así, lo que comienza como una respuesta a un relato político antisistema puede terminar moldeando comportamientos persistentes. El riesgo no es solo fiscal o bancario; es cultural. La preocupación ante ello no significa dejar de poner en el centro a los estudiantes o mirarlos solo como deudores. Por el contrario, apelar a esos lugares comunes del buenismo económico para cuestionar las medidas de cobro no es más que otra manifestación del problema.

Violencia escolar: un ejemplo

En Chile, tal vez la mayor normalización de situaciones inadmisibles se observa en lo que debería ser un pilar de progreso para la población: la educación, y particularmente la pública. Desde los movimientos estudiantiles de 2006, la progresión del deterioro en la convivencia dentro de muchas comunidades escolares no ha parado. Así, lo que partió con un cierto grado de sentido común (la demanda por una educación de calidad) ha dado paso a niveles de indisciplina y violencia que no deberían ser tolerados en ninguna sociedad. En esto, la responsabilidad de parte importante de la clase política es innegable, pues permitió cambios legales que hicieron imposible una

reacción adecuada de las autoridades escolares.

La situación de los liceos emblemáticos representa el mejor ejemplo de cómo la gradual tolerancia a incivildades, sumada a reformas equivocadas en contra del mérito académico, hipotecaron uno de los puntales del modelo educacional chileno, clave histórica del ascenso social de las clases medias. La ausencia de una respuesta oportuna y proporcional de las autoridades para detener las manifestaciones iniciales dio paso a actos de violencia coordinados, en los que grupos radicalizados no solo han puesto en riesgo la formación de los estudiantes, sino incluso sus vidas. En un país que busca ofrecer oportunidades a jó-

venes de esfuerzo, esto debería haber generado repudio y una acción decidida de tolerancia cero a la violencia.

Por el contrario, lo que hubo fue una regresión facilitada por un relato político equivocado. Sin contención, la violencia e indisciplina se expandieron en colegios como el Instituto Nacional y el Liceo de Aplicación. Ambos ofrecen hoy un pálido reflejo de lo que fueron. Y los disturbios y barricadas en el Liceo Lastarria observados esta semana recuerdan cuán poco se ha avanzado en identificar, detener y procesar a los responsables de estas acciones bárbaras. El nuevo gobierno enfrenta aquí un desafío central: terminar con la normalización y la tolerancia de lo inaceptable.